

LEGAJO DE APELACIÓN EN LA CAUSA CPE 944/2020, CARATULADA: “C. A. J. S/ INFRACCIÓN LEY 22.415”. J.N.P.E. N° 10, SECRETARÍA N° 19. EXPEDIENTE N° CPE 944 /2020/3/1/CA2. SALA “B”. ORDEN N° 31.596.

///nos Aires, de mayo de 2024.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de A. J. C. contra la resolución por la cual el señor juez “*a quo*” dispuso el auto de procesamiento del nombrado.

El memorial presentado por la defensa de A. J. C. en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, por la resolución apelada, el señor juez a cargo del juzgado “*a quo*” dictó el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, de A. J. C. con relación al suceso descrito como “*...la presunta puesta en circulación en los mercados financieros del exterior de dinero proveniente de un ilícito penal, para darle apariencia posible de un origen lícito*”.

Al respecto, se indicó que “*...se presume que las divisas extranjeras treinta mil [ochocientos] dólares estadounidenses (USD 30.800); veinte mil dólares canadienses (USC 20.000) y los cuarenta mil pesos argentinos (\$) 40.000) que transportaba el día 19/12/2020 al pretender abordar el vuelo H2 508 de la empresa aerocomercial SKY, con destino a la ciudad de Santiago de Chile -Sumario PSA 1104EZE/20- se vincularían con operaciones marginales cambiarias y, probablemente, generadas a partir de activos no declarados al fisco*” y que “*...dicha actividad era realizada por este en forma habitual, como su medio de vida*”.

El suceso indicado fue calificado con las previsiones del art. 303, incisos 1 y 2 , apartado “a”, del Código Penal.

2º) Que, por el recurso de apelación interpuesto, la defensa de A. J. C. expresó que el auto de procesamiento de su pupilo procesal resultaría nulo por adolecer de fundamentación insuficiente.

En este sentido, el recurrente señaló que la conclusión del juez de la instancia previa respecto del origen ilícito de los bienes secuestrados a A. J. C. resultaría arbitraria, dado que el nombrado habría realizado setenta operaciones de compra de moneda extranjera desde el año 2002 (por una suma equivalente a seiscientos mil pesos aproximadamente) y que habría recibido



tres millones quinientos mil pesos de su ex esposa en carácter de compensación por la venta de un inmueble.

Asimismo, la defensa manifestó que de la lectura del auto de mérito en cuestión no surge ninguna acción tendiente a convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que adquieran la apariencia de un origen lícito.

Por lo demás, se agravio de que se hayan aplicado al caso de autos las previsiones del art. 303, inciso 2, apartado “a”, del Código Penal, toda vez que no se verificarían los requisitos normativos exigidos para tener por configurada aquella circunstancia agravante.

3º) Que, las actuaciones principales se formaron con motivo del procedimiento plasmado en el acta de fecha 19/12/2020, por la que se dejó constancia que “[e]n el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini...en circunstancias en que se efectuaban los controles rutinarios en el Punto de Inspección y Registro...denominado ‘PREEMBARQUE 1/16’...sobre los pasajeros y sus pertenencias próximos a partir en el vuelo Nro. H 508, empresa aerocomercial SKY, con destino a la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, se hizo presente ante el control de referencia, una persona [que fue identificada luego como A. J. C.]...solicitando [el personal policial] que se retire el calzado debido a que a simple vista el mismo presentaba apliques metálicos...y lo coloque sobre la cinta transportadora...momento en el cual el pasajero...atraviesa el pórtico detector de metales, visualizando en dicho acto, la Oficial [interviniente] como el pasajero caminaba de forma inusual, por lo que la Oficial...observa una protuberancia no acorde, por lo que le indica que se retire la media, refiriendo en ese instante el pasajero que estaba transportando aproximadamente treinta mil dólares estadounidenses...”.

Con motivo de la requisita dispuesta por el juzgado de la instancia anterior respecto de A. J. C. , se labró una nueva acta por la cual se dejó constancia que el nombrado transportaba treinta mil ochocientos dólares estadounidenses (U\$S30.800) -de los cuales se determinó posteriormente que U\$S100 eran falsificados; confr. fs. 300/302 de los principales-, veinte mil dólares canadienses (C\$20.000) y cuarenta mil pesos argentinos (\$40.000).

4º) Que, asimismo, es de destacar que la totalidad de los dólares estadounidenses secuestrados al imputado fueron hallados en cuatro fajos acondicionados en el interior de las medias que vestía al momento de presentarse al control policial (a la altura de los tobillos y en la planta de los pies), mientras que la suma requisada correspondiente a los dólares



canadienses fueron habidos en cuatro fajos ubicados “*en la parte trasera del torso a la altura de la cintura*”, “*entre las piernas a la altura de las partes íntimas*” y en el bolsillo trasero del pantalón. Por su parte, los pesos argentinos se encontraban acondicionados en una cartera que A. J. C. transportaba como equipaje de cabina (confr. fs. 5/7 vta. y las fotografías del procedimiento de fs. 13/31 de los autos principales).

Asimismo, en el equipaje de mano del nombrado se encontraron un total de nueve formularios con la leyenda “DECLARACIÓN SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MONEDA O INSTRUMENTOS MONETARIOS - MINISTERIO DE HACIENDA - SERVICIO DE ADUANAS DE LOS ESTADOS UNIDOS” (confr. fs. 35/35 vta. del expediente principal).

5º) Que, el juzgado de la instancia previa le recibió la declaración indagatoria a A. J. C. y dispuso el auto de procesamiento del nombrado por considerarlo autor (art. 45 del C.P.) del delito de contrabando (arts. 863 y 864, inciso “d”, del Código Aduanero), en grado de tentativa (art. 871 del mismo cuerpo legal), por haber intentado abordar el vuelo Nro. H2508 de la empresa aerocomercial SKY el 19 de diciembre de 2020 con destino a la República de Chile, transportando en forma oculta las sumas de dinero aludidas.

Aquel pronunciamiento fue apelado por la defensa del nombrado y resultó confirmado por este Tribunal (confr. CPE 944/2020/4/CA1, res. del 30/12/2021, Reg. Interno N° 843/21).

Corresponde señalar que el señor juez “*a quo*” con fecha 10/03 /2023 dispuso la elevación parcial de la causa a juicio con relación a la participación culpable presunta de C. en el hecho aludido por el párrafo primero de este considerando.

6º) Que, corresponde examinar en primer lugar las manifestaciones de la defensa de A. J. C. tendientes a descalificar el auto de procesamiento apelado como un acto jurisdiccional válido, toda vez que, según aquella parte expresó, aquel pronunciamiento sería nulo por falta de fundamentación.

En este sentido, corresponde expresar que para que la nulidad de una resolución se produzca por causa de vicios en la fundamentación, aquélla debe contener omisiones sustanciales de motivación, o resultar auto contradictoria, o arbitraria por apartamiento de las reglas de la sana crítica, de la lógica, de la experiencia o del sentido común, o estar basada en apreciaciones meramente dogmáticas. Estos defectos no se advierten en la resolución recurrida, que ofrece una motivación suficiente de lo decidido, sin perjuicio del acierto o del desacierto de aquel pronunciamiento.



Por lo demás, este Tribunal ha expresado en numerosas oportunidades que el postulado rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos. La interpretación de la existencia de aquéllas es restrictiva (confr. art. 2° del C.P.P.N.) y sólo procede la declaración cuando por la violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para la parte que las invoca, y no cuando se plantean en el único interés de la ley o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial (confr. Regs. Nos. 367/00, 1170/00, 533/07, 602/15, 72/16 y causa N° CPE 433/2020/13/CA7, res del 18/11/2021, Reg. Interno N° 728/21 y CPE 1043/2017/9/CA8, res. del 7/2/2022, Reg. Interno N° 12/2022, entre muchos otros, de esta Sala “B”).

7°) Que, asimismo, este Tribunal ha establecido con anterioridad que, sin perjuicio de la exigencia genérica de fundamentación de los autos que se dispone por el art. 123 del C.P.P.N., por el art. 308 del mismo cuerpo legal se establecen, específicamente, las formas que deben observarse para la validez de un auto de procesamiento (confr. Reg. N° 379/11, 63/12 y 712/13 y causas N° CPE 61011858/2009/3/CA1, res. del 13/07/18, Reg. Interno N° 572/18, CPE 656/2018/3/CA1, res. del 4/4/2019, Reg. Interno N° 202/19 y CPE 695/2016/6/CA3, res. del 11/2/2022, Reg. Interno N° 31/2022, entre muchos otros, de esta Sala “B”).

Por lo tanto, es útil poner de relieve que, por el pronunciamiento cuestionado, se consignaron los datos personales de A. J. C. , se expresaron los motivos por los cuales se dictó la decisión impugnada, se detalló la prueba recolectada, se efectuó una descripción del hecho investigado y de la intervención que el imputado habría tenido en aquél, así como se indicó la calificación “*prima facie*” atribuible, con cita en las disposiciones legales que se consideraron aplicables.

En consecuencia, corresponde establecer que, toda vez que por la resolución recurrida se observaron las previsiones del art. 308 del C.P.P.N., los agravios invocados por la defensa no tendrán una recepción favorable.

8°) Que, por lo tanto, se advierte que la falta de fundamentación argumentada sólo constituye una discrepancia de la parte recurrente con los criterios vinculados con la cuestión de fondo debatida en los autos principales y con las conclusiones a las cuales se arribó por la resolución apelada, sin que por aquella circunstancia se encuentre mérito suficiente para declarar la invalidez del auto de procesamiento examinado.



9º) Que, en forma previa a ingresar al fondo de la cuestión traída a estudio de esta Sala “B”, corresponde destacar las circunstancias siguientes que surgen de las constancias obrantes en los autos principales y en el legajo de actuaciones complementarias Nro. 3.

a) La A.F.I.P. informó, entre otras cuestiones que cabe aquí tener por reproducidas, que A. J. C. se encuentra inscripto en la categoría “C” del monotributo, así como que el nombrado no se encuentra dado de alta en el Impuesto a los Bienes Personales y no registra presentación de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias (confr. fs. 125, 185, 213/214 y 526/546 del legajo de actuaciones complementarias aludido).

b) El Registro de la Propiedad Inmueble expresó que A. J. C. no registra propiedades a su nombre (confr. fs. 229).

c) El Banco Central de la República Argentina detalló que A. J. C. registró entre el año 2006 y el año 2011 un total de cincuenta y tres operaciones de compra de divisas, mientras que entre el 01/07/2017 al 31/12/2020 efectuó dos operaciones de compra de moneda extranjera por ocho mil seiscientos noventa y cuatro pesos -\$ 8.694- y cuatro de venta de divisas por un total equivalente a doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y dos pesos -\$ 248.892- (confr. fs. 450/450 vta. y 574 vta).

Igualmente, fue posible establecer que el Banco Central efectuó tres circularizaciones (con fechas 24/10/2011, 12/04/2019 y 24/10/2020) por las que solicitó a las entidades financieras que no dieran curso, sin previa autorización, a operaciones de cambio a nombre de C. .

d) El Banco Santander Río informó que A. J. C. es titular de una caja de ahorro en dólares, la cual registró entre el 1/01/2017 y el 31/12/2020 depósitos por un total de ochocientos dólares estadounidenses -US\$800- (confr. fs. 578/579).

e) La Dirección Nacional de Migraciones informó que A. J. C. registró un total de 1039 ingresos y egresos del territorio nacional entre 22/07/2012 al 21/06/2022. En este sentido, es de destacar que la mayoría de los traslados aludidos se realizaron a la República Federativa del Brasil, a la República del Paraguay y a la República de Chile, y abarcaron períodos cortos, siendo que en muchos casos C. egresó y retornó al país en el mismo día (confr. fs. 587/627).

f) A. J. C. fue investigado en el marco de la causa CPE 502/2019, la cual se formó con motivo de los testimonios extraídos de la causa 8000/18 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, en la que se denunció, entre otros hechos, que “...una persona llamada A. J. C. , ingresaría al país mercadería (valijas, mochilas y/o celulares) de forma ilegal, evadiendo controles aduaneros fronterizos, para luego viajar, junto con la mercadería, en ómnibus de la empresa Vía Bariloche y finalmente



comercializarla en un local comercial, propiedad del denunciado, ubicado en la intersección de las calles Viamonte y Suipacha... ”.

Con fecha 17/11/2020 el juzgado interviniente dispuso el archivo del expediente aludido en los términos del art. 213, inc. “d”, del C.P.P.N., así como ordenó la remisión de copias de la causa al Juzgado Federal de Paso de los Libres y a la D.G.A. ante la existencia eventual de una infracción aduanera (confr. fs. 440/442 vta.).

g) Con fecha 13/02/2023 el Juzgado Federal de Mendoza N° 1 citó a A. J. C. a prestar la declaración indagatoria en el marco del expediente FMZ 23072/2022-C del registro del Juzgado Federal de Mendoza N° 1 “...*por la presunta infracción al artículo 864 inciso d) en función del art. 863 con el agravante del artículo 865 inciso i), ambos de la ley 22.415, en concurso real...*” por “...*haber en principio para fecha 01 de junio de 2022...exportado de la República Argentina siete lingotes de oro con un peso aproximado de 1,000 kilogramos, ocultos en su equipaje y sin declarar...*” y por “...*por haber [el 13 de junio de 2022]...exportado de la República Argentina once lingotes de oro con un peso aproximado de 1.6499 kilogramos, oculto en su equipaje y sin declarar...*” (se prescinde del destacado y de las mayúsculas del original, al cual corresponde la transcripción efectuada).

Respecto de los hechos aludidos se indicó que C. egresó en ambos casos por el Paso Internacional Cristo Redentor, haciendo trámites migratorios y aduaneros en el Complejo Fronterizo Los Horcones del departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, sin declarar la mercadería en cuestión ante las autoridades nacionales.

Igualmente, se detalló que el valor en plaza del metal precioso en cuestión era de U\$S 97.027,16 y de U\$S 104.789,33; respectivamente (confr. fs. 692/692 vta.).

h) Las autoridades de la República Oriental del Uruguay informaron a la D.G.A. con relación a tres procedimientos aduaneros ocurridos durante el año 2013 en los que se secuestraron a E. M. B. un total de R\$73.000 y €10.000; a L. I. A. R\$47.100, €7.000 y U\$S1.000; así como a A. J. C. R\$10.000; €22.500 e “*instrumentos monetarios*” por un total de \$141.943, en la oportunidad en que los nombrados pretendían ingresar a aquel país. En los procedimientos aludidos se indicó que B. y A. manifestaron que el dinero que les había sido secuestrado era transportado por indicación de C. , quien habría reconocido la titularidad de las sumas en cuestión. Con motivo de aquellos procedimientos aduaneros se impuso a A. J. C. una multa equivalente a las sumas de dinero secuestradas (confr. fs. 608/609 vta.).

Igualmente, se informó respecto de otro procedimiento aduanero ocurrido en la República Oriental del Uruguay en el año 2015 en el que se le habría secuestrado a R. D. R. la suma de U\$S11.390, en la oportunidad en que



intentaba egresar de aquel país desde el puerto de la ciudad de Colonia. Es de destacar que D. R. afirmó el dinero secuestrado “...*pertenecía a su patrón, de nombre J. , domiciliado en la calle L. de la ciudad de Buenos Aires*”, determinándose que la persona indicada era A. J. C. , a quien se le impuso una multa equivalente al monto de dinero aludido (confr. fs. 638/639).

A su vez, se acompañaron copias del expediente Nro. 475-151/2014 del registro del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno de la República Oriental del Uruguay en el marco del cual fueron detenidos M. M. , L. L. D. R. y M. E. A. en el puerto de la Ciudad de Colonia del Sacramento con las sumas de R\$202.490; U\$S154 y pesos uruguayos 51.430, sin declarar, quien indicaron que el dinero en cuestión era transportado para A. J. C. (confr. los documentos digitalizados en el marco de la causa principal).

10º) Que, establecido lo anterior, cabe señalar que, a criterio de quienes suscriben la presente, los elementos de cargo que fueron valorados por la resolución apelada constituyen un cuadro probatorio idóneo y suficiente para sustentar, con el alcance exigido por el art. 306 del C.P.P.N. la estimación provisoria efectuada por el juzgado de la instancia anterior acerca de la materialidad del hecho delictivo presunto detallado por el considerando 1º de la presente y la intervención de A. J. C. en aquél.

11º) Que, lo expresado por la defensa de A. J. C. en cuanto a que no se encontraría acreditado el origen ilícito de los fondos vinculados con la maniobra denunciada en autos, ni cuál sería el delito por el cual estos fondos habrían sido obtenidos, no puede tener recepción favorable en esta instancia.

Al respecto, corresponde indicar que el cuestionamiento aludido parte de un análisis aislado en orden a la entidad convictiva de los elementos de prueba incorporados actualmente a la causa, sin embargo, como ha sido establecido por este Tribunal en casos anteriores, “...*aquel análisis parcial no puede tener una recepción favorable, pues la eficacia de las presunciones que podrían derivar de cada elemento de prueba depende de la valoración conjunta que se efectúa de aquéllos teniendo en cuenta la diversidad, la correlación y la concordancia de los mismos, pero no de un tratamiento particular y aislado pues, por su misma naturaleza, cada uno de los indicios no puede llegar a fundar aisladamente ningún juicio convictivo, el cual deriva de la pluralidad y de la concordancia de éstos (confr. Fallos 300:928)...*” (confr., entre muchos otros, Regs. Nos. 43/11, 490/11 y 718/12, como también CPE 387/2010/2/CA1, res. del 24/10/2014, Reg. Interno N° 464/14; CPE 1538/2010/4/CA1, res. del 10/03/2015, Reg. Interno N° 58/15; CPE 12005804/2009/2/CA1, res. del 17/07/2015, Reg. Interno N° 310/15; CPE 1274/2013/6/3



/CA3, res. del 18/09/2015, Reg. Interno N° 419/15 y CPE 354/2014/2/CA1, res. del 1/07/2016, Reg. Interno N° 312/16, de esta Sala “B”, así como CPE 1561/2018/67/105/CA55, res. del 8/10/2019, Reg. Interno N° 684/19 y CPE 1913/2019/5/CA1, res. del 18/02/2020, Reg. Interno N° 46/20 de la Sala “A” de este Tribunal).

En este sentido, “...la totalidad de los elementos probatorios arrojados al expediente debe ser objeto de una valoración articulada, contextual y conjunta dentro del plexo probatorio, el cual, evaluado en un acto único y con ajuste a la sana crítica racional, posibilita la obtención de una acabada constatación de los hechos investigados. El mero análisis parcializado de los elementos de prueba incorporados al proceso impide la comprensión global del hecho de que se trata” (confr., entre otros, Regs. Nos. 879/03, 785/10, 360/13 y CPE 278/2013/4/CA2, res. del 31/10/2016, Reg. Interno N° 624/16 de esta Sala “B”; así como CPE 1561/2018/67/105/CA55, res. del 08/10/2019, Reg. Interno N° 684/19 y CPE 1913/2019/5/CA1, res. del 18/02/2020, Reg. Interno N° 46/20 de la Sala “A” de esta Cámara).

12º) Que, en el contexto probatorio reseñado por el considerando 9º de la presente, si se tiene en cuenta las circunstancias en las que las divisas en cuestión fueron secuestradas a A. J. C. , el estado de deterioro de los billetes, la documentación que tenía en su poder, la existencia de otros procesos -en el territorio nacional y en el exterior- en los que se le atribuyó al nombrado haber transportado divisas u oro internacionalmente de manera irregular -personalmente o por intermedio de terceras personas-, la cantidad importante de viajes que habría efectuado en los últimos diez años y el patrimonio del imputado, la conclusión del juzgado de la instancia previa en cuanto a que el dinero secuestrado a C. no se vincularía con suma alguna que haya adquirido legalmente, así como que el mismo tendría una procedencia espuria y que iba a ser aplicado a una operación para que obtenga una apariencia lícita de origen, posee respaldo probatorio suficiente, cuanto menos con el grado de alcance que esta instancia procesal demanda.

13º) Que, en este sentido, corresponde recordar que no es necesario que en la presente causa, que actualmente tiene por objeto la investigación y la acreditación de responsabilidades penales supuestas por hechos presuntos de lavado de activos de origen delictivo, se investigue el ilícito penal previo del cual procedería aquel dinero, cuyo origen espurio debe estimarse probado, con el alcance requerido para este momento del proceso de acuerdo a la ponderación conjunta y armónica de las circunstancias señaladas



previamente (confr. en sentido similar, CPE 43/1019/3/CA1, res. del 12/5/2020, Reg. Interno N° 177/20 y CPE 411/2015/32/CA2, res. del 12/08/2022, Reg. Interno N° 348/22 de esta Sala “B”, entre otros).

14º) Que, asimismo, si bien, como el recurrente argumentó, A. J. C. habría comprado divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios en oportunidades numerosas entre el año 2006 y el año 2011 (confr. fs. 450/450 vta. del incidente Nro. 3), no es posible soslayar que los dólares estadounidenses y los dólares canadienses que le fueron secuestrados al nombrado “...ostentaban un gran deterioro...” (conf. el peritaje obrante a fs. 300/302), motivo por el cual aquella suma de dinero no se correspondería con la que C. habría adquirido legalmente muchos años antes del hecho investigado en autos, toda vez que no resultaría razonable que un banco o una casa de cambios entregue a un cliente billetes en mal estado o que quien adquiere las divisas para atesoramiento o ahorro las acepte en esas condiciones deficientes.

Igualmente, con relación a lo expuesto por A. J. C. , en cuanto afirmó haber recibido el 30/11/2017 la suma de \$3.500.000, en concepto de compensación por parte de su ex mujer al tramitar el divorcio, no es posible soslayar que desde la fecha indicada hasta el procedimiento que motivó la formación de las presentes actuaciones, el nombrado registró operaciones de cambio por montos bajos, motivo por el cual la suma aludida, que fue entregada en pesos argentinos y en efectivo -conforme la documentación acompañada-, tampoco podría corresponderse con el dinero que fue secuestrado al imputado, previa conversión del mismo en el M.U.L.C; al margen de lo establecido por el párrafo anterior en lo atinente al estado de deterioro de los billetes.

15º) Que, con relación a lo expresado por el considerando anterior, corresponde señalar que el hecho de que A. J. C. haya adquirido divisas en el mercado legal de cambios oportunamente, que haya percibido una suma de dinero al separarse de su ex mujer o cualquier otra circunstancia que justifique que el nombrado posea una cantidad determinada de dinero de origen lícito, no obsta a que pueda establecerse la participación culpable del nombrado en alguna de las figuras delictivas previstas por el art. 303 del Código Penal. En este sentido, si bien la mayor o menor entidad del patrimonio del imputado se erige como un dato relevante para ser ponderado en un caso como el de autos, no es el único elemento a los fines de determinar preliminarmente la ilicitud de origen del dinero investigado, dado que esta conclusión debe basarse en una valoración conjunta y armónica de los elementos de prueba obrantes en la causa, de acuerdo a las reglas de la lógica,



de la experiencia y del sentido común, inferencia que en las presentes actuaciones, como se expresó por el considerando 12° de la presente, se encuentra ajustada a derecho.

16°) Que, sin perjuicio de la necesidad eventual de producir alguna prueba, así como por los resultados que aquélla pudiera traer aparejada en el futuro, no pueden soslayarse las conclusiones expresadas por los considerandos anteriores, que se basan en las constancias que actualmente se encuentran incorporadas a la encuesta, ni se impide adoptar el temperamento que se establece por el art. 306 del ordenamiento adjetivo, pues por aquel ordenamiento se prevé el carácter provisorio, revocable y reformable del auto de procesamiento (art. 311 del C.P.P.N.), precisamente para que el juez pueda ponderar aquellas circunstancias futuras en el supuesto en que se produjesen (confr. Regs. N° 1036/05, 132/08, 7/11, 379/11, 703/11, 762/11, 161/12, CPE 403/2012/2/CA1, res. del 12/06/2015, Reg. Interno N° 237/15; CPE 827/2014 /3/CA1, res. del 29/04/2016, Reg. Interno N° 167/16 y CPE 1546/2018/5/CA2, res. del 21/03/2023, Reg. Interno N° 88/23; entre muchos otros, de esta Sala “B”).

En este sentido, este Tribunal ha establecido: “...para el dictado del auto de procesamiento se requieren elementos de prueba por los cuales, al menos, se permita corroborar la existencia de un estado de probabilidad con respecto a la comisión del delito investigado, y a la participación culpable de los indagados por aquel hecho...” (confr., Regs. Nos 606/10; CPE 403/2012/2 /CA1, res. del 12/06/2015, Reg. Interno N° 237/15 y CPE 1546/2018/5/CA2, res. del 21/03/2023, Reg. Interno N° 88/23; entre otros, de esta Sala “B”).

17°) Que, por lo demás, toda vez que se encuentra verificada, en principio, la procedencia de un auto de procesamiento, debe señalarse que la calificación otorgada al hecho “*prima facie*” atribuido a A. J. C. , no se advierte que pueda tener una incidencia concreta en otros aspectos centrales de la situación del imputado, como por ejemplo, el atinente al régimen de libertad provisoria y pues, conforme se expresó por numerosos pronunciamientos anteriores, “...la calificación recaída en este tipo de pronunciamientos no causa estado, no es vinculante para el Ministerio Público Fiscal, ni condiciona un eventual cambio de calificación en el requerimiento de elevación a juicio y en la sentencia definitiva (confr. Regs. Nos. 426/00, 243 /06 y 182/07, entre otros, de la Sala ‘B’ y 7/12, 72/12, 251/12, 288/12, 533/12, 627/12 y 689/12 de la Sala ‘A’)...” (confr. CPE 701/2017/20/CA7, res. del 21 /05/2018, Reg. Interno N° 315/18; CPE 269/2018/8/CA3, res. del 29/06/2018, Reg. Interno N° 488/18 y FSM 24005569/2013/1S/3/CA4, res. del 19/09 /2022, Reg. Interno N° 405/22 de esta Sala “B”, entre muchos otros).



18º) Que, por lo expresado por las consideraciones que anteceden, corresponde concluir que el auto de procesamiento dictado respecto de A. J. C. resulta ajustado a derecho, por lo que corresponde que sea confirmado.

19º) Que, por último, con relación a la decisión del juzgado “*a quo*” de disponer un embargo sobre los bienes de A. J. C. , debido a que por el recurso de apelación interpuesto por la defensa del nombrado no se introdujo agravio autónomo alguno con relación a aquella decisión (confr., al respecto, lo expuesto por el acápite I de la presentación en cuestión), corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación deducido respecto del punto dispositivo V de la resolución recurrida (confr. arts. 445 y 450 del C.P.P.N.).

Por ello, **SE RESUELVE:**

I. DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por la defensa de A. J. C. con el alcance establecido por el considerando **19º** de la presente.

II. CONFIRMAR la resolución apelada.

III. CON COSTAS (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase junto con el legajo CPE 944/2020/3 -en formato digital y físico-, así como con la documentación reservada por la secretaría.

Firman sólo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía restante de esta Sala.

